

Santiago, trece de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS:

En los autos Rol N° C-573-2019, del 1° Juzgado Civil de Valdivia, por sentencia de 28 de octubre de 2019, se acogió la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral deducida por don Juan Antonio Garcés Carreón, con motivo de la detención ilegal y torturas de que fue objeto, condenando al Fisco de Chile a pagar al actor la suma de \$100.000.000 (cien millones de pesos) más reajustes en la proporción que varíe el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha en que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada, más intereses desde que el deudor se constituya en mora, sin costas.

En contra de la sentencia definitiva de primera instancia, el Fisco de Chile interpuso recurso de apelación, fundado en los agravios consistentes en el rechazo de las excepciones de cosa juzgada, reparación y prescripción. En subsidio, solicitó la rebaja del monto de la indemnización.

La referida sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, con fecha 2 de marzo de 2020, con declaración que se reduce el monto de la indemnización a \$50.000.000, más los intereses y reajustes indicados en el fallo individualizado.

En contra de esta última resolución, don Natalio Vodanovic Schnake, en representación del Fisco de Chile, dedujo sendos recursos de casación en la forma y en el fondo, los cuales se trajeron en relación con fecha 21 de abril de 2020.

CONSIDERANDO:



PRIMERO: Que el recurso de nulidad formal se sustenta en la causal prevista por el N° 6 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 772 inciso tercero, 766, 769 y 158 del mismo cuerpo legal, por haberse dictado la sentencia impugnada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada.

Desarrollando los motivos de su agravio, en primer lugar explica que ante el 5° Juzgado Civil de Santiago, en la causa Rol N° C-9405, el demandante Garcés, junto con otros 514 actores dedujeron demanda en contra del Fisco de Chile por los mismos hechos, la que con fecha 13 de abril de 2010, fue rechazada, por estimar que la acción civil impetrada se encontraba prescrita. A continuación, agrega, que la Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo de los recursos de apelación resolvió, en la causa Rol N° 4240-2010 con fecha 2 de junio de 2011, confirmar la aludida sentencia, la que quedó ejecutoriada el 2 de septiembre de 2011, en los autos rol N° 6407- 2011.

Luego, pone de relieve que la sentencia recurrida desestimó la excepción de cosa juzgada deducida por el Fisco de Chile, luego de hacer suyos los fundamentos de la de primera instancia, añadiendo que: “De los antecedentes surge que la decisión en causa Rol N° 9405-2005 del 5° Juzgado Civil de Santiago fue dada sin un efectivo examen de los elementos que integran la contienda (indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado), pues declaró la improcedencia procesal de la acción y acogió la excepción de prescripción de la acción civil y, por ende, materialmente el conflicto no ha sido decidido. En efecto, en los considerandos 5° y 6° de la sentencia dictada en causa Rol N° 6407-2011, la Excma. Corte Suprema deja establecido que en el fallo de



primera instancia, confirmado en toda sus partes por la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol N° 4240-2010), no fija como hechos de la causa los requisitos o condiciones necesarias para hacer surgir la responsabilidad extracontractual demandada al Estado, lo que es demostrativo de la falta de decisión substancial de la controversia. En consecuencia, no hay cosa juzgada en su sentido material, por lo que la decisión del juez de rechazar la excepción en análisis aparece ajustada a derecho”.

Enseguida, agrega que, el tema a dilucidar pasa por la naturaleza de la excepción de prescripción; o sea, si la misma puede o debe estimarse como un aspecto que mira al fondo de la respectiva acción, o si su aceptación sólo da lugar a una cosa juzgada formal. Indica que por cosa juzgada formal, procesal o adjetiva, se considera aquella que tiene sus límites en el juicio, porque el aspecto referido en la resolución o sentencia sí puede discutirse válidamente de nuevo en otro juicio, generalmente de cognición ordinaria. En cambio, Las excepciones perentorias o alegaciones de fondo, por otro lado, siempre miran al fondo del asunto, y su aceptación, de concurrir la triple identidad de estilo, siempre da lugar a la cosa juzgada material.

Que, así las cosas, y dado que se declaró prescrita la acción reparatoria – prosigue el impugnante- hubo un pronunciamiento de fondo, no meramente formal o adjetivo, que puso término definitivo a la contienda, pues la sentencia definitiva ejecutoriada ya dictada en el proceso del año 2005, que declaró la prescripción de la acción patrimonial indemnizatoria, produce la excepción de cosa juzgada respecto a la demanda de indemnización de perjuicios contra el Fisco de Chile impetrada en autos, pues conforme con lo dispuesto en el artículo 177 del Código



de Procedimiento Civil, concurre la triple identidad necesaria, a saber, identidad legal de personas, de cosa a pedir y de causa de pedir, máxime si los hechos en que se funda una y otra demanda son idénticos.

En la parte petitoria solicita se invalide el fallo impugnado y dicte acto continuo y sin nueva vista una sentencia que revoque la de primera instancia y desestime la demanda de autos, en todas sus partes, acogiendo la excepción de cosa juzgada alegada, con costas.

SEGUNDO: Que por el recurso de casación en el fondo interpuesto por el Fisco de Chile, en primer lugar se reprocha la contravención del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y artículo 19 del Código Civil.

Reitera que el Fisco opuso la excepción de cosa juzgada respecto del demandante Juan Antonio Garcés Carreón por cuanto iguales pretensiones indemnizatorias, basadas en los mismos hechos – y también fundada en las normas internacionales, constitucionales y legales que constituyen el estatuto de los derechos humanos y en aquellas que establecen los sistemas de responsabilidad del Estado-, ya fueron conocidas y resueltas mediante sentencia ejecutoriada y firme en los autos rol N° C-9405 del 5° Juzgado Civil de Santiago, caratulados “Aguilar González Orlando y otros con Fisco de Chile”, oportunidad en que se declaró prescrita la acción intentada, coincidiendo en la triple identidad que hace procedente esta excepción.

Luego de exponer el significado de la institución de la cosa juzgada y describir los hechos en que la funda, argumenta que dicho instituto, ha sido reconocido en diferentes instrumentos del derecho internacional. Pone de relieve que pese a que no hay en los instrumentos internacionales interamericanos un



reconocimiento expreso al principio de la cosa juzgada, su configuración jurídica se ha ido consolidando. Tanto así, que hoy incluso se reconoce que las sentencias de tribunales internacionales gozan de “cosa juzgada internacional” reconociendo así que ya no solo los sistemas jurídicos domésticos se levantan sobre la seguridad jurídica que entrega la cosa juzgada, sino que también el de las cortes internacionales.

En consecuencia –prosigue el impugnante- ninguna interpretación de alguna norma de derecho internacional, puede servir de base para que los tribunales nacionales revivan procesos fenecidos y dejen sin efecto la cosa juzgada de que gozan sentencias firmes y ejecutoriadas, dictadas por los tribunales chilenos, en ejercicio pleno y legítimo de sus facultades.

Concluye, manifestando que si hubiese sido debidamente aplicada la normativa contenida en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, conforme al artículo 19 del Código Civil, se habría acogido la excepción de cosa juzgada opuesta por esta defensa, y, por ende, habría negado lugar a la demanda, respecto del demandante Juan Antonio Garcés Carreón.

Por el siguiente apartado alega la contravención de los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, de la Ley N° 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y artículos 19 y 22 del Código Civil, al rechazar la excepción de pago esgrimida por el Fisco de Chile.

Detalla que los jueces del fondo vulneraron el artículo 17 de la Ley N° 19.123, por cuanto, sobre la base de un errado método de interpretación legal, que vulneró los artículos 19 inciso primero y 22 inciso primero del Código Civil, se



concedió al demandante una indemnización, no obstante que ya fueron reparados por el mismo hecho.

Pone de relieve que desde el momento en que el actor optó por percibir los beneficios de la Ley N° 19.123, y que en el hecho los percibió, se extinguieron sus acciones en contra del Fisco de Chile.

Afirma, que de aplicar la sentencia adecuadamente, en su verdadero sentido y alcance, la normativa individualizada, se habría acogido la excepción de reparación satisfactiva opuesta por el Fisco de Chile.

En tercer término, denuncia una falta de aplicación de los artículos 2.332 del Código Civil, en relación con los artículos 2.492, 2.497, 2.514, 19 y 22 inciso 1° del mismo cuerpo legal. En su opinión, al dejar de aplicar las normas del derecho interno sobre prescripción extintiva, se incurrió en una contravención formal por omisión, toda vez que en nuestra legislación no existe fuente nacional o internacional que establezca, prorrogue, suspenda o interrumpa los plazos de prescripción de la acción responsabilidad civil extracontractual del Estado en casos de violaciones de derechos humanos.

Finalmente esgrime que la sentencia de marras incurrió en una falsa aplicación de normas de derecho internacional sobre Derechos Humanos, que no desarrollan la imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales. Así –continúa el impugnante- el fallo de segunda instancia, como el de primera, que ha sido confirmado por éste, no cita ninguna disposición concreta y precisa de algún tratado internacional suscrito y vigente en nuestro país, que establezca expresamente la imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales provenientes de violaciones a los derechos humanos. En conclusión, la sentencia recurrida ha



aplicado a la acción patrimonial una imprescriptibilidad prevista exclusiva y expresamente para la acción penal, sin ningún respaldo jurídico internacional, y, además, en contra del claro mandato de los artículos 2.332 y 2.497 del Código Civil.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso impetrado, se anule la sentencia recurrida, respecto del demandante Juan Antonio Garcés Carreón, dictando la de reemplazo que revoque la de primera instancia, acogiendo las excepciones opuestas y niegue lugar a la demanda de autos en todas sus partes, con costas.

I. EN CUANTO AL RECURSO DE CASACION EN LA FORMA.

TERCERO: Que para resolver acerca del recurso en examen, es del caso subrayar que la causal de casación en la forma invocada en el recurso es la sexta del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil: “En haber sido dada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que ésta se haya alegado oportunamente en el juicio”.

CUARTO: Que se dice por el recurrente Fisco de Chile que se da el antagonismo requerido al efecto, porque:

a) La sentencia definitiva de primera instancia dictada por el Primer Juzgado Civil de Valdivia, con fecha 28 de octubre de 2019, resolvió rechazar las excepciones de cosa juzgada, de reparación (pago) y de prescripción extintiva de la acción opuesta por el demandado Fisco de Chile y acoge la demanda civil de indemnización de perjuicios, por concepto de daño moral, deducida por el demandante Juan Antonio Garcés Carreón, ordenando al primero a pagar a éste la suma de \$ 100.000.000 (cien millones de pesos), más reajustes e intereses en la forma que determina y no condenar en costas. Luego, la sentencia definitiva de



segunda instancia, en contra de la que se dirige este recurso de casación en la forma, dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, con fecha 02 de marzo de 2020, conociendo del recurso de apelación del Fisco de Chile en contra de la de primera instancia, resolvió confirmarla, con declaración que se rebaja la indemnización de perjuicios por concepto de daño moral a la suma de \$ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), más los reajustes e intereses indicados en el fallo de primera instancia.

b) No obstante que, anteriormente el demandante Juan Antonio Garcés Carreón, había ya demandado al Fisco de Chile, por los mismos hechos de la demanda posteriormente presentada. Determinadamente, otra demanda de indemnización que había sido rechazada por sentencia firme y ejecutoriada en los autos rol C - 9405 - 2005, del 5° Juzgado Civil de Santiago. Dado que, con fecha 13 de Abril de 2010, dicho 5° Juzgado Civil de Santiago en los autos referidos, caratulados: “Aguilar González Orlando y otros con Fisco de Chile”, en el que uno de los demandantes correspondía a Juan Antonio Garcés Carreón, dicta sentencia definitiva de primera instancia rechazando la demanda, sin costas.

Lo anterior habida consideración que el fallo señaló en su considerando octavo: “Que al efecto cabe tener a la vista lo preceptuado en el artículo 2497 del Código Civil, en el sentido que la prescripción corre contra toda persona incluido el Fisco a favor y en contra del mismo y las Municipalidades. Ello implica que puede accionarse en su contra, pero dentro de determinados plazos, no que pueda reclamársele al Estado, indemnización de perjuicios por el actuar de sus agentes. Pero si es dable la exigencia que, si el hecho por el cual se reclama tiene fecha cierta y es un hecho preciso y determinado, - no como en el caso de detenidos



desaparecidos, en el cual no hay certeza -, hay un plazo establecido legalmente, el cual una vez transcurrido, hace precluir el derecho de quien estimaba que las circunstancias sufridas, ameritaba ser indemnizado por el Estado.”

La misma sentencia agregó en el fundamento siguiente: “Que en el presente caso, quienes demandan son familiares de fallecidos en fecha determinada, y afectados por detenciones ilegales y torturas, quienes también tiene las fechas en que acaecieron esos hechos, es dable comprender que dada las especiales condiciones vividas entre los años 1973 y 1990, no era dable exigir que quienes habían visto afectados sus derechos fundamentales ejercieran acciones en contra del Fisco, en esa época. Sin embargo, con el arribo de la democracia, no haba razón valedera para dejar transcurrir los años sin ejercer acción alguna, en el presente caso 15 años, ya que recién demandan en el año 2005”.

Enseguida en el razonamiento décimo indicó “Que así las cosas, atendido el tiempo transcurrido, resultando del todo plausible acoger la prescripción planteada por el Fisco, como alegación de fondo”.

Dicha sentencia definitiva de primera instancia -expresa el impugnante- fue confirmada mediante sentencia de segunda instancia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago, causa Rol N° C-4240, de fecha 02 de junio de 2011.

Finalmente, dice el recurso, mediante sentencia de 02 de septiembre de 2011, la Excm. Corte Suprema, Rol N° 6407- 2011, rechazó un recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandante en contra de esa sentencia.

QUINTO: Que el recurrente en cuanto a la configuración de la excepción de cosa juzgada hecha valer, enfatiza que:



Para la Segunda Sala Penal de la Excma. Corte Suprema, la excepción de cosa juzgada: "(...)tiene lugar cuando concurren dos litigios entre las mismas partes, seguidos ante el mismo o diverso tribunal, siempre que versen sobre igual objeto pedido y con demandas basadas en la misma causa de pedir, de donde se concluye que para su configuración es necesaria la misma triple identidad requerida para la cosa juzgada, con la salvedad que el juicio que da origen a la excepción en mención debe estar pendiente, puesto que de lo contrario procedería la cosa juzgada, teniendo ambas como objetivo principal impedir la dictaminó de fallos contradictorios (Mario Casarino Viterbo, "Manual de Derecho Procesal, Tomo IV, página 31; Dario Benavente, "Derecho Procesal Civil, Juicio Ordinario y Recursos Procesales", Quinta Edición, revisada por Juan Colombo, año 2004, página 23; Carlos Anabalón, "Tratado Práctico de Derecho Procesal Civil Chileno", Tomo III, página 148 y 149; Cristian mataran Miquel, "Actuaciones Judiciales, Notificaciones, Resoluciones Judiciales y el Juicio Ordinario, Facultad de Derecho Universidad de Chile página 90), así como que "es la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen, contra de ella otros medios de impugnación que permitan modificarla" (Eduardo Couture, citado en " breves Nociones acerca de la Cosa Juzgada de los profesores Mario Mosquera R. Y Cristian Mataran M. Depto Derecho Procesal, Universidad de Chile. Año 1991, páginas 5 y 6).

En el mismo sentido, el profesor Giuseppe Chiovenda la define como "la afirmación indiscutible y obligatoria para los jueces de todos los juicios futuros de una voluntad concreta de la ley, que reconoce o desconoce un bien de la vida a una de las partes" (Instituciones de Derecho Procesal Civil, Ed. Rev. de Derecho Privado, Madrid, página 409)".



En razón de lo anterior, indica el recurrente, resulta evidente la existencia de triple identidad exigida por los artículos 175, 177 y 310 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el demandante ya lo demandó, por los mismos hechos de autos, en causa civil rol C-9405-2005, del 5º Juzgado Civil de Santiago, demanda que fue rechazada por encontrarse prescrita la acción, sentencia que produce efecto y autoridad de cosa juzgada, existiendo triple identidad, a saber:

Identidad legal de personas: En ambas causas el demandante es Juan Antonio Garcés Carreón. En ambas causas el demandado es el Fisco de Chile.

Identidad de la cosa pedida: En ambas demandas se solicita indemnización de perjuicios por daño moral en contra del Fisco de Chile.

Identidad de causa de pedir: En ambas causas la causa de pedir es la detención y torturas sufridas por el actor, Juan Antonio Garcés Carreón, hecho ocurrido durante septiembre de 1973, acciones ejecutadas por agentes del Estado, prolongándose la privación de libertad por alrededor de un mes, siendo posteriormente relegado por 18 meses.

SEXTO: Que del mérito de los antecedentes del proceso aparecen como hechos asentados que el demandante don Juan Garcés Carreón, demandó ya previamente al Fisco de Chile, por los mismos hechos de la demanda presentada en el año 2005, por su responsabilidad en la detención y torturas experimentadas por el actor, cometidos por agentes del Estado.

En ambas demandas se interpusieron pretensiones indemnizatorias basadas en los mismos hechos – y también fundada en las normas internacionales, constitucionales y legales que constituyen el estatuto de los derechos humanos y en aquellas que establecen los sistema de responsabilidad



del Estado- las que fueron conocidas y resueltas mediante sentencia definitiva y ejecutoriada que declaró improcedente la acción deducida, acogiéndose la excepción de prescripción de la acción civil, según da cuenta la sentencia de fecha 13 de abril de 2010, en los autos Rol N° C-9405-200, pronunciada por el 5° Juzgado Civil de Santiago. Este fallo fue confirmado por la ICA de Stgo., conociendo del recurso formulado por el demandante, en los autos Rol N° C-4240-2010, con fecha 02 de julio de 2011, para, finalmente, rechazarse el recurso de casación en el fondo formulado por el demandante, a través de sentencia de la Excm. Corte Suprema, de 02 de septiembre de 2011, en los autos rol 6407-2011.

SÉPTIMO: Que la cosa juzgada formal, procesal o adjetiva, es aquella que tiene sus límites en el juicio, porque el aspecto referido en la resolución o sentencia sí puede discutirse válidamente de nuevo en otro juicio, generalmente de cognición ordinaria. En cambio, las excepciones perentorias o alegaciones de fondo –naturaleza de la de cosa juzgada-, siempre miran al fondo del asunto, y su aceptación, de concurrir la triple identidad de estilo, siempre da lugar a la cosa juzgada material. Una excepción perentoria, a diferencia de las dilatorias, mira al fondo del pleito y tiene por objeto enervar la acción y consiste en la oposición de algún hecho impeditivo, extintivo o modificativo, que excluye sus efectos jurídicos.

OCTAVO: Que esta Corte Suprema ha dicho que “cuando se trata de acciones o de excepciones que se refieren a la existencia de la obligación, que es el caso de autos, lo resuelto en aquel juicio produce cosa juzgada en éste” (Corte Suprema, 30.11.1926, RDJ, t 24, citada por Alejandro Romero Seguel, en La cosa juzgada en el proceso civil chileno, nota en pág. 22).



NOVENO: Que la dogmática por largo tiempo viene ofreciendo diversos conceptos de la cosa juzgada. Destacamos en ella el que la hace consistir “simplemente en la prohibición de que los juicios se repitan; existe para dar fijeza a los juicios ya emitidos y, como consecuencia, seguridad jurídica al sistema jurídico – social” (Jordi Nieva Fenoll, “La cosa juzgada. El fin de un mito”. Legalpublishing, Chile, 2010, p. 33).

Se ha dicho también que “es la noción que define la imposibilidad de alterar – por medio de un recurso judicial o, en su caso, de una nueva demanda – el contenido de una resolución – material o procesal, en el curso de un único proceso, así como sustantiva o de fondo, en el marco de sucesivos procesos – firme e irrevocable” (Sonia Calaza López, “La cosa juzgada”, La Ley, Madrid, 2009, p. 32-33).

Por otra parte, esta Corte en fallos anteriores, ha señalado que “hay cosa juzgada cuando confrontando la acción deducida en ambos pleitos, su objeto y fundamento, resulta que es la misma situación jurídica que se pretende someter nuevamente a la decisión judicial, sin que desaparezca esta igualdad de situación por no ser unas mismas las expresiones con que el demandante sustenta su derecho, si sustancialmente tienen el mismo alcance”. (R.D.J., T. 9, secc. 1ª, pág. 437)."

En todos estos conceptos está presente la idea de inmutabilidad de una decisión contenida en la sentencia definitiva, sea dentro del mismo proceso, sea en otro distinto, en que se pretenda renovar la discusión ya zanjada jurisdiccionalmente.



DÉCIMO: Que esta Corte ha sostenido clásicamente que el instituto jurídico en referencia atañe a los efectos jurídico-procesales del litigio ya concluido en la nueva acción que ha sido propuesta; lo que importa una limitación al derecho que, por regla general tienen las partes para postular acciones de toda clase. Por consiguiente, su objetivo es impedir un nuevo pronunciamiento sobre materias en que ya ha recaído una decisión, reconociéndose un carácter inmutable a las decisiones jurisdiccionales, para lograr una efectiva seguridad jurídica que permitirá una completa certeza, “impidiendo la renovación indefinida de pleitos entre las partes sobre el mismo asunto” (Corte Suprema Rol N° 1289-2005 y recientemente, Rol N° 20.520-18 de 14 de noviembre de 2019, Rol N° 21015-20 de 5 de agosto de 2020 y Rol N° 24138-19 de 18 de agosto de 2020).

UNDÉCIMO: Que, en el caso de autos, se advierte que la presente demanda se construyó sobre la base de sostener que la interpretación de las normas del Derecho Internacional de Derechos Humanos pueden servir de base para que los tribunales nacionales renueven la discusión de materias ya resueltas por sentencias firmes y ejecutoriadas pronunciadas por tribunales de justicia chilenos, pretiriéndose el efecto de cosa juzgada emanado de tales sentencias.

DUODÉCIMO: Que si bien –como ya ha quedado más arriba dicho- una de las instituciones fundamentales del proceso jurisdiccional es la cosa juzgada (en virtud de la cual –mirada como excepción- no es posible que un asunto que ya fue resuelto en una sentencia judicial firme pueda volver a debatirse en un nuevo juicio, existiendo identidad legal de partes entre uno y otro, de objeto y de causa), y cuyo propósito es evitar la discusión eterna sobre la cuestión, dando certeza jurídica como instrumento de la paz social, no es menos efectivo que la



conurrencia o no de los requisitos que la hacen procedente debe analizarse no solo a la luz del ordenamiento jurídico interno, sino que también conformarse al ordenamiento internacional sobre derechos humanos, por imperativo del inciso 2° del Art. 5° de la Carta Fundamental.

DÉCIMO TERCERO: Que en ese orden de ideas, cabe destacar que tanto el derecho nacional como el derecho internacional contemplan excepciones al instituto de la cosa juzgada que emana de sentencias firmes.

En efecto, en el primero se excepcionan de tal efecto a las sentencias ejecutoriadas que producen solo cosa juzgada formal, o aquellas que producen la llamada cosa juzgada substancial provisional; del mismo modo, se prevé que las sentencias firmes obtenidas fraudulentamente puedan ser dejadas sin efecto mediante la acción de revisión; y, finalmente, existe consenso en cuanto a privar del efecto de cosa juzgada a las sentencias ejecutoriadas que se han dictado en un proceso en que no existió emplazamiento del demandado y en que éste no haya –por tal motivo- comparecido al juicio, impidiendo la formación de la relación jurídico-procesal, produciéndose lo que se denomina en doctrina como “cosa juzgada aparente”.

DÉCIMO CUARTO: Que por su parte, en el derecho internacional de los derechos humanos se ha asentado la doctrina -recogida en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) – en orden a que la cosa juzgada fraudulenta no produce el efecto que es propio del instituto; y tiene ese carácter aquella en que en la sustanciación del juicio que culminó en la sentencia definitiva firme no se cumplieron las exigencias de un debido proceso.



Al respecto, se ha dicho: *“En concordancia con la Convención y con lo que expresa la Corte Interamericana en repetidas ocasiones, los Estados partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la responsabilidad general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre en su jurisdicción(artículo 1.1) (Corte IDH, 1988, párr. 91; 2008a, párr. 77; 2008b, párr. 34)”*.

Luego del pronunciamiento anterior, la jurisprudencia interamericana desde el año 2000 ha determinado, en una serie de fallos, los alcances con respecto a lo que debe entenderse como cosa juzgada fraudulenta. V. Gr., *“en el caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala, la Corte Interamericana adujo que la normativa internacional examina a qué se conoce como este tipo de fraude –artículo 20 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998); artículo 20 del Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda (1994) y artículo 9 del Estatuto del Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia (1993)– y expresó que esta actividad defectuosa resulta de un juicio en el que no se han respetado las reglas del debido proceso, o cuando los jueces no obraron con independencia e imparcialidad (Corte IDH, 2004, párr. 131)”*;

DÉCIMO QUINTO: Que sigue de lo anteriormente expuesto que aun cuando se ha dicho reiteradamente por la Corte IDH que en materia de violación a los derechos fundamentales –como es el caso de autos–, las víctimas deben ser reparadas por los Estados en forma integral, para lo cual debe ponerse a



disposición de éstas las acciones tendientes a dicha reparación para que las ejerzan en un debido proceso en que se respeten todas las garantías procesales de orden constitucional, no es menos cierto que dichos parámetros y exigencias se cumplieron en el primer juicio que aquí se ha invocado como fundamento de la excepción de cosa juzgada.

En efecto, habiéndose sustanciado aquel juicio ante un tribunal independiente e imparcial y sin vulneración alguna a las garantías procesales de la parte actora –esto es, en un debido proceso–, no es posible sostener que la sentencia firme que desestimó la acción no produzca el efecto de cosa juzgada, toda vez que no reviste, el carácter de fraudulenta, por no configurarse los presupuestos necesarios para otorgarle dicha calificación.

DÉCIMO SEXTO: Que, sobre la base de lo ya razonado, el fallo objeto de la casación en estudio ha incurrido en el vicio que se denuncia en el recurso de casación en la forma, interpuesto por el Fisco de Chile, esto es, se ha configurado la causal de invalidación ya referida y prevista en el numeral 6° del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en haber sido dada dicha sentencia contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que ésta se haya alegado oportunamente en el juicio, la que al ser desestimada por los sentenciadores del grado influyó en lo dispositivo del fallo y causaron al recurrente un perjuicio reparable sólo con la invalidación del mismo; debiendo procederse –a fin de reparar tal perjuicio– conforme prevé el inciso tercero del citado código, como se dirá en lo resolutivo.

II.- EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO:



DÉCIMO SÉPTIMO: Que en razón de lo dicho y lo dispuesto en el artículo 808 del Código de Procedimiento Civil, no se emitirá pronunciamiento respecto del recurso de casación en el fondo deducido por la demandada Consejo de Defensa del Estado.

Y visto, además, lo preceptuado en los artículos 767, 772 y 785 del Código de Procedimiento Civil, 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se declara que :

I.- Se acoge el recurso de casación en la forma formalizado por el Consejo de Defensa del Estado en representación del Fisco de Chile, en lo principal de su presentación de folio 20, en contra de la sentencia de dos de marzo de 2020, la que en consecuencia es nula, dictándose acto seguido y sin nueva vista, la sentencia de reemplazo que se dirá.

II.- Que en razón de los precedentemente resuelto, no se emitirá pronunciamiento sobre el recurso de casación en el fondo deducido por el Consejo de Defensa del Estado en representación del Fisco de Chile, en el primer otrosí de su presentación de folio 20, en contra de la sentencia de dos de marzo de 2020.

Acordada con el voto en contra del Ministro (s) señor Zepeda, y del abogado integrante señor Munita, quienes estuvieron por el rechazo de los recursos de casación formal y sustancial interpuestos por el Fisco de Chile, teniendo presente las siguientes consideraciones:

1.- Que la pretensión hecha valer en ambas causas dice relación con que se reconozca y declare la responsabilidad del Estado de Chile, representado en autos por el Fisco de Chile, en la comisión de conductas que se consideran en la



categoría de crímenes y delitos de lesa humanidad. Los que, en cuanto a sus efectos y consecuencias jurídicas, deben ser enfrentados por los tribunales nacionales en razón de las acusaciones y demandas ante instancias judiciales por familiares de las víctimas y las propias víctimas en contra del Estado de Chile, las que imploran del Estado la reparación íntegra del daño causado por la comisión de conductas constitutivas de ilícitos de lesa humanidad por parte de éste, ejecutadas por medio de sus agentes.

Sin embargo, rechazar los arbitrios casacionales no significa en caso alguno pretender evadir la cosa juzgada entrando a calificar la legalidad o justicia de la sentencia anterior, con el fin de desconocer o dejar sin efecto lo resuelto en ese fallo, sino que, como se analizará y concluirá, no puede haber cosa juzgada aunque se reúnan los requisitos pertinentes, si la ley niega en determinados casos expresamente tal autoridad.

Situación jurídica que es lo sucede precisamente en relación con la sentencia impugnada, ante la existencia de garantías judiciales conferidas por las Convenciones y Tratados Internacionales, cuyas disposiciones han sido los fundamentos directos de la demandante para accionar en contra del Estado de Chile, en el sentido de que la cosa juzgada no puede ser invocada por éste para así desconocer la categoría de hechos constitutivos delitos de lesa humanidad a la luz del derecho internacional de los derechos humanos reconocidos por Chile y, de esa manera exonerarse de la responsabilidad que en ellos le asiste.

2.- Que, en efecto, el fallo recurrido, comprendiendo el de primera instancia que aquel reproduce totalmente con excepción del párrafo segundo del motivo décimo octavo que elimina, contiene la pretensión del demandante acerca de los



daños y perjuicios derivados de las conductas ilícitas calificadas en la categoría de ilícitos de lesa humanidad, pudiendo el tribunal que lo dicta conocer que los estatutos invocados en la demanda consideran la sustancial condición del perjuicio y daño como inherente a los delitos de lesa humanidad. Entregando la pretensión y lo decisivo para dilucidar, en cuanto a los hechos, a la preexistencia de una precisa y determinada violación a los derechos humanos del demandante reconocidos en dichos estatutos.

3.- Que, así, la sentencia de primera instancia registra que el actor pide en su demanda que se reconozca y declare la responsabilidad del Estado de Chile en la comisión de delitos de lesa humanidad, determinadamente, conductas ilícitas que se encuentra en tal categoría de hechos, consistentes en detención ilegal, prisión y tortura, ejecutadas por diversos miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, durante el régimen militar y, por consiguiente, que se ordene al demandado indemnizar íntegramente los daños y perjuicios derivados de éstas.

Sosteniéndose por el fallo en definitiva que, el material probatorio aportado al proceso permitía la imputación de las ilicitudes como conductas de lesa humanidad, concluyendo la sentencia recurrida resolver acoger la demanda deducida en los términos en ella indicados.

4.- Que en relación con lo afirmado precedentemente, se señala en el fallo de primera instancia que el demandante, Juan Antonio Garcés Carreón, se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura,



establecida por el Decreto Supremo N° 1040, del año 2003, del Ministerio del Interior, conocida como Comisión Valech 1, Víctima N° 9497.

Además transcribe que el actor, según la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, elabora el relato acerca de lo vivido de la forma siguiente: “Yo (Juan Garcés Calderón el año 1973 tenía 19 años de edad, trabajaba como operario de maquinaria en la empresa CHIPRODAL OSORNO. Vivía junto a mi hermana y un sobrino de la familia en calle Tarapacá 1373, de la misma ciudad de Osorno. Mi detención ocurrió a los pocos días después del Golpe Militar. No recuerdo la fecha exacta pero si recuerdo que fue durante la jornada de la tarde, como a las 17.00 horas. Había llegado de un turno largo de trabajo, y estaba durmiendo una siesta, como de costumbre. Sorpresivamente llega un grupo de personas, compuesto de uniformados y otros de civil, todos portando armamento, fusiles y pistolas, llegan hasta la misma puerta de la casa, y le preguntan a mi sobrino quien jugaba afuera, si yo estaba en la casa. El tenía un poco más de 10 años de edad, respondió que sí, que estaba en mi dormitorio. Ellos, sin autorización de nadie (al menos de ningún adulto, porque mi hermana estaba en la cocina) de súbito y con violencia entran a la casa, buscan mi dormitorio con desesperación y cuando lo encuentran, interrumpen mi sueño con un golpe de fusil en mi cabeza, despierto inmediatamente, pero muy aturdido, con una profunda herida que sangraba profusamente por sobre mi cara y pecho, muy asustado sin entender nada, pregunté que pasaba, intentando ponerme de pie. Ví a varios uniformados que rodeaban mi cama, al menos 4 o 5 y dos de ellos me toman de los brazos, tirándome me gritan por medio de garabatos que me despierte, que me vistiera rápidamente. La sangre, era un problema para mí,



porque no veía nada, conscientes de eso al parecer, toman una sábana de mi cama, con la cual me cubren la cabeza con el objeto de detener la sangre, y también, para que mi sobrino no vea la herida o la sangre. Me bajaron al primer piso de la casa, y me dicen que suba a una camioneta, aún la recuerdo, era roja, cabina abierta, me gritan que suba al pickup tendido boca abajo, junto a mí se sentó un militar que me llevaba aprisionado con su pie, y a punta de cañón, exclamaba que si subía la cabeza me mataría. Preocupado por mi sobrino que les abrió la puerta, solicité que no le hicieran nada, pero el pequeño ya había arrancado. El vehículo dio inicio a su marcha, yo sin saber donde me llevarían. Luego de 15 minutos de desplazamiento, el vehículo se detiene, me ordenan bajar y en ese momento me quitan la sábana, y puedo ver que era un recinto militar, el Regimiento de Ingenieros Nº 4, Arauco. Lo conocía porque el día 3 de enero de 1973, había ingresado a ese mismo lugar para cumplir con el llamado de servicio militar obligatorio (En ese entonces, mi instrucción militar se interrumpió abruptamente por el fallecimiento de mi madre. Los pocos días de haber ingresado, me expulsaron y me dieron de baja por ese motivo, la fecha del fallecimiento de mi madre fue el 20 de enero de 1973).

En ese lugar de detención, me llevaron a una oficina, ante una persona uniformada, quien no se identificó (más tarde supe que su nombre era Felipe Cossi, ayudante del Fiscal Militar). Me dijo, de una manera muy violenta, que yo quedaría detenido por ser miembro de un grupo subversivo. Inmediatamente me llevaron a otra habitación con muy poca luz, donde me interrogaron durante horas, para obtener información del grupo subversivo al que me vinculaban, que sería integrada por gente del comercial Osorno, donde yo había estudiado. Me



preguntaban por nombre y hechos, material impreso y armas, me preguntaban sobre su domicilio, lugar de acopio o sobre planes de ataques, manifestaciones, que tendríamos planeado realizar en los siguientes meses. En todo momento, después de cada pregunta, me propinaban golpes en la cabeza, cara, boca, con golpes de puños y palmas en los oídos (el llamado telefonazo). Este primer interrogatorio fue eterno, tal vez dos o tres horas. No podía contestarles nada porque no tenía idea de lo que preguntaban. Se enfadaban con mi silencio y negativas, más duros se ponían, como esperando doblegarme física y psíquicamente, los golpes eran hasta el punto de perder la conciencia, pero paraban un momento y seguían. Luego de eso, aturdido por la violencia física y psíquica, sin poder moverme por mis propios medios, me trasladaron al cuartel de investigaciones de Osorno.

En ese segundo recinto permanecí durante 4 días recluso, solo en una celda pequeña de un poco más de dos metros, con un camastro de cemento, sin ropa de cama y baño. Aislado, no tenía contacto con ningún otro detenido. Cada tres horas aproximadamente, me iban a buscar, me golpeaban, me interrogaban y me dejaban de pie, sin moverme, esperando mi turno mientras escuchaba gritos y veía como sacaban otros compañeros ensangrentados y a veces inconscientes, mientras los carceleros te recordaban que ya sería mi turno, que no me impaciente (tono irónico de lo militares).

Mi hermana se pudo enterar de mi detención recién en ese lugar. Me visitó, no permitían contacto con los familiares, pero si entregaban el alimento y ropa que enviaban, había sido privado de ellos durante esos primeros días, aún tenía la ropa ensangrentada del día que me golpearon en mi casa. Luego, al cabo de



unos días, fui trasladado a otro tercer lugar de detención, ubicado en dependencias de la empresa Felco de Osorno. Ahí estuve aproximadamente 15 días, bajo el mismo método de tormentos, interrogatorios eran hechos en otros lugares, nos movían y solo regresamos ahí como acopio de prisioneros, interrumpían el sueño abruptamente, lo que causaba desorientación en los días de detención y realmente perturba la mente. Nuestra celda era un salón grande, en ese lugar estábamos al menos unas 80 personas, dormíamos sobre piso de cemento, uno al lado del otro, sin ropa de abrigo. Fue en ese lugar, donde me encontré con gente que conocía, ex compañeros de colegio, vecinos del barrio y gente que conocía porque pertenecían al F.E.R. (frente de estudiantes revolucionarios). Ese lugar parecía de transición, nos llevaban diariamente ante la fiscalía militar, y en ese lugar muchos fuimos fichados, nos tomaron fotos de rostro, huellas dactilares, nos desnudaban para examinarnos.

Luego fui traslado a mi cuarto lugar de detención, el Estadio Español de Osorno. Allí éramos alrededor de 200 personas, estábamos en el gimnasio como animales, siempre custodiados por militares con armas, no podíamos ni conversar ni movernos. En la Cárcel fueron torturas muy duras, mucho más que en los recintos anteriores: varias veces me aplicaron corriente en el cuerpo desnudo, mojado y vendado, me recostaban en una cama metálica (le decían “la parrilla”) conectaban la corriente por los dedos de las manos, pies, boca, cabeza, ano, testículos. Me golpeaban con palos en las extremidades, espalda, peco, muchas veces ponían sacos de arena como para que el golpe no deje huellas. Después de las palizas, nos privaban de agua por horas y del alimento ni hablar, era lo necesario para manearnos con vida. Siempre, mientras era torturado amenazaban



que golpearían a mi familia, tenía mucho miedo por mi hermana y sobrino. Dentro de mi detención, me enteré por rumores que mi casa fue allanada en varias ocasiones, patrullas militares y camiones, ingresaron y destruyeron todo el mobiliario, colchones, sillones, techo, paredes, suelo, buscando armamento (decían mientras rompían) pero nunca encontraron nada, eso destruyeron todo quedando mi familia muy afectada.

Finalmente el día 17 de octubre de 1973, me comunican de la resolución del fiscal militar, el Sr. Antonio Ramírez Parga, un documento que me fue leído en voz alta y decía que a partir de ese momento, al séptimo día, debía presentarme en un destacamento en la ciudad de Chillán, donde había sido relegado. No podía creerlo, tenía alegría de mi libertad, pero temor con lo que me encontraría en mi casa, en las calles, en la sociedad chilena, durante mi detención se acrecentaron mis miedos, realmente no entendía que pasa por mi cabeza, era un angustia constante, un estado de shock, una contradicción de la libertad/miedo, una incertidumbre total por el futuro. No quería saber lo que me encontraría en casa. Al llegar la vi destruida, todo ultrajado completamente, habían destruido los muebles, libros, camas, techo, suelo, paredes. Mi hermana y sobrino, estaban muy asustados y al verme regresar, extrañamente ellos se comportaban muy atemorizados por represalias, ya que mientras estaba detenido, volvieron varias veces a la casa a revisarla; durante los 6 días no intercambiamos palabra alguna, excepto que yo me iría a Chillán. Yo era el hombre de la casa, luego de la muerte de mi madre, yo debía cuidarlos, pero el comunicarles de mi relegación, siento que fue como una traición para ellos, resentimiento que perdura hasta hoy, llegado el séptimo día, viajé por mis medios hacia Chillán, acompañado por el Sr. Mario



Santibáñez Velázquez que se encuentra fallecido), quien había sido relegado también hacia esa ciudad. La primera gestión en Chillán, fue buscar ayuda para poder pernoctar; ninguno de los dos tenía familia o conocidos allá, la única alternativa era acercarnos a la iglesia Evangélica Asamblea De Dios, su pastor Juan Parra Bustos, nos ofreció su generosa ayuda. Al día siguiente, muy temprano nos reportamos en el Regimiento de Infantería número 9 de Chillán, en calidad de trasladados desde Osorno, exhibiendo a la autoridad militar el salvo conducto de relegación. Nos ordenaron que a contar de esa misma fecha, debíamos firmar 3 veces por semana, los días lunes, miércoles y viernes, por un período de 18 meses en ese lugar. Lo que me obligó forzosamente a residir por más de un año allí. Gracias a la ayuda del pastor, pude sobrevivir, encontré cobijo en la Iglesia, dándome apoyo emocional, espiritual y físico, ellos nos proporcionaban abrigo, techo y alimentos, incluso dinero, o nos ayudaban dando pequeños oficios, ya que era muy difícil trabajar por nuestros antecedentes. Pasados los 18 meses, regresé a Osorno, al Regimiento de Ingenieros Arauco donde comenzó este horroroso calvario de detención y tortura. Me enviaron a la Fiscalía Militar Osorno, que funcionaba en Investigaciones de Chile, donde nuevamente me ordenaron firmar, ahora desde el año 1974 a 1978, firmando los mismos 3 días a la semana, fueron 4 años más de sentirme detenido, con miedo a socializar, me sentía vigilado todo el tiempo. Fue una prolongación a mi detención, no podía desplazarme con libertad, mis actividades siempre eran coartadas por la firma, no encontraba trabajo por mis antecedentes, y muchas veces perdí trabajos porque no podía cumplir con los turnos por ir a firmar. Incluso, muchas veces me detuvieron por llegar conversando, o por llegar tarde a firma, eran detenciones de 2 a 4 horas, en



la misma fiscalía. Pasé en total un poco más de un mes detenido en diferentes centros, y otro relegado 18 meses, para sentenciarme a pertenecer firmando hasta el año 1978.

Nunca más volví a ser el mismo de antes, cuando joven, de un día para otro se derrumba todo, perdí mi trabajo, familia y amigos. Luego de mi detención y tortura fui estigmatizado, mis cercanos me dieron la espalda, tuve que dejar mi ciudad y trasladarme sin mi consentimiento al norte. Tuve dificultades para trabajar, ya que la firma siempre producía sospecha en mis empleadores, me dediqué a la agricultura. Viví muchos años con permanentes depresiones, crisis de pánico, angustias, insomnios, problemas en la cadera las aglomeraciones y los ruidos fuertes me perturban, y la oscuridad me desespera, tengo que dormir con la luz prendida y la puerta abierta; todos es consecuencia de la prisión política y torturas, males que sólo pude empezar a tratar el año 2000. Cada día es una lucha, porque debo funcionar en la vida, afrontando mis profundas tristezas y miedos.”

5.- Que, particular interés tiene para los fines de este recurso el que el fallo recurrido, integrado éste por el de primera instancia que hace suyo, acepta ocuparse en forma lata acerca del marco del derecho que rige la materia. En efecto, reconoce expresamente:

“DECIMO: Que, como ha señalado la Excma. Corte Suprema (Rol N° 13.699 - 15) las acciones civiles tendientes a obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados, encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y establecimiento normativo en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado de



Chile a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política.

Los artículos 1.1. y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagran la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos y queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de Derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de ese hecho. Estas normas de rango constitucional imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y, en especial a los tribunales nacionales en tanto éstos no pueden interpretar las normas de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile. Por esta razón, no resultan aplicables a estos efectos las normas del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, pues ellas contradicen lo dispuesto en la normativa institucional.” (Considerando DECIMO del fallo de primera instancia reproducido por el de segunda instancia).

6.- Que, en relación con lo anterior cabe señalar que, de conformidad al artículo 1.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos, las obligaciones referidas se tienen por el Estado de Chile y todos los Estados partes, de acuerdo al alcance y contenido de los derechos consagrados en la Convención Americana



para con "toda persona que esté sujeta a su jurisdicción". El párrafo 2 de este artículo enseña que "persona" es "todo ser humano", lo que reafirma la noción de universalidad de los derechos humanos y de prohibición de discriminación en el ejercicio y goce de dichos derechos esenciales de la persona humana.

7.- Que, asimismo, este artículo 1 de la Convención establece con claridad dos de las obligaciones más importantes que nacen para los Estados partes, estas son, las de respetar los derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce.

Por consiguiente, convencionalmente para el Estado de Chile y demás Estados partes, las consecuencias o efectos jurídicos de estas obligaciones son la exigibilidad inmediata de respeto de los derechos humanos y en el plano individual la tiene frente a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción, sin discriminación alguna.

En consecuencia, la obligación de respetar el ejercicio y goce exige al Estado y a todos sus agentes abstenerse de violar los derechos humanos establecidos en la Convención Americana.

Por su parte, la obligación de garantizar, exige al Estado el deber ineludible de emprender las acciones necesarias para asegurar que todas las personas sujetas a su jurisdicción, siempre estén en condiciones de ejercerlos y de gozarlos en forma íntegra.

8.- Que, en relación a lo anterior, en el Caso Velásquez Rodríguez con Estado de Honduras, párrafo 166, la Corte Americana de Derechos Humanos, sostuvo:

"Esta obligación implica que el Estado está obligado a organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales



se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.”

Asimismo, la Corte Americana de Derechos Humanos precisa en este Caso Velázquez Rodríguez con Estado de Honduras, párrafo 167, que frente a esta categoría de ilicitud la acción del Estado no puede ser solo en la forma en lo que respecta a la obligación de garantizar: “(...) no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.”

9.- Que, en consecuencia, es una obligación Convencional en la materia que al Estado de Chile y a los demás Estados partes el que si una conducta ilícita por parte de éstos, ejecutada por medio de sus agentes, imputada y probada como delito de lesa humanidad, es decir, como un ataque flagrante de la dignidad humana, a la noción de humanidad misma, por lo que afecta a todos y cada uno de los miembros del género humano, no solo les está prohibido admitirla de alguna forma, sino que, además, deben emprender todas las acciones necesarias para que las personas de su jurisdicción puedan efectivamente hacer realidad el ejercicio y goce de tales derechos.



10.- Que, en este orden de ideas, de acuerdo al deber de todos los órganos del Estado de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Constitución Política de la República, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, el Estado debe decidir cumplir con las normas sobre derechos humanos y al implícitamente no hacerlo luego del requerimiento, al controvertirse por cualquier medio tal principio de favorabilidad que protege a la persona afectada, se debe aplicar por el tribunal el derecho interno de conformidad y en armonía con dichas normas internacionales de los derechos humanos, cumpliendo así con la obligación de hacer el adecuado control de Convencionalidad, interpretando y aplicando las normas nacionales que pudieren afectar derechos humanos de acuerdo con las obligaciones internacionales contraídas en la materia. Sin que ninguna norma del derecho interno permita alguna distinción que vaya en contra del cumplimiento de tal responsabilidad.

11.- Que, la delimitación categorial establecida en el derecho internacional para las normas de derechos humanos, cabe considerarlas en relación con la existencia del principio general de derecho internacional que obliga a los Estados a cumplir los tratados de buena fe. Por lo que el Estado no puede descansar en la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones internacionales, porque se lo impide su legislación interna, dado que tiene que observar las disposiciones del tratado en toda su integridad. Máxime si el tratado a aplicar ha recibido toda la fuerza legal interna al haber sido ratificado y haber cumplido todos los trámites establecidos en el ordenamiento para su promulgación vigente.



Como quiera que el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, dispone:

“El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.”

E inmerso en este estado de definición categorial se encuentra el régimen interpretativo a aplicar en materia de derechos humanos, contemplado en el inciso segundo del artículo 5º de la Constitución Política de la República, que instruye:

“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”

12.- Que la importancia de los razonamientos efectuados es que permiten aseverar que, al aplicar el control de convencionalidad, sin ningún género de dudas, se constata la irrelevancia de cualquier excepción cosa juzgada en relación con la acción civil que pretende la reparación íntegra de los daños y perjuicios derivados de la ejecución de esta categoría de ilícitos, porque precisamente la ley niega expresamente tal posibilidad, por no respetar las disposiciones imperativas inherentes al derecho internacional de los derechos humanos.

13.- Que, en efecto, no hay cosa juzgada por más que se reúnan los requisitos pertinentes si la ley niega su autoridad a dicha creación, como sucede en este caso, aún más, tratándose una de ley de rango superior cuya



obligatoriedad deriva tanto de la aplicación judicial como de su consagración convencional.

14.- Que lo anterior se traduce en la inadmisibilidad - a partir del respeto del principio de derecho internacional "pacta sunt servanda" - de que a las disposiciones de un tratado de derechos humanos no se les asegure la exclusión de toda norma interna que pretenda impedir que, si hubo violación de esta categoría de derechos que ha sido establecida en la causa y se ha concluido que es atribuible al Estado, excluya tal responsabilidad.

15.- Que, lo expuesto conduce, a juicio de estos disidentes, a rechazar el recurso de casación en la forma interpuesto por el Fisco de Chile no procediendo anular el fallo por ese aspecto.

16.- Que, el primer acápite del recurso de casación en el fondo interpuesto por el Fisco de Chile, denuncia que la sentencia definitiva de segunda instancia, realizó una errónea aplicación del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, al acoger la excepción de cosa juzgada, pues ninguna interpretación de alguna norma de derecho internacional, puede servir de base para que los tribunales nacionales revivan procesos fenecidos y dejen sin efecto la cosa juzgada de que gozan sentencias firmes y ejecutoriadas, dictadas por los tribunales chilenos, en ejercicio pleno y legítimo de sus facultades.

17.- Que, como ya se señaló, el delito de secuestro calificado de Juan Antonio Garcés Carreón, acreditado en estos autos ha sido determinado como de lesa humanidad por las sentencias de instancia, lo que tiene como consecuencia que el demandante tiene la calidad de víctima, conforme al derecho internacional



de los derechos humanos, al tenor de la Resolución de las Naciones Unidas sobre derechos de las víctimas de tales delitos.

18.- Que dicho documento expresa “(...) se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o a las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización” (Principio V.8. de la resolución 60/147, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que establece Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, 16 de diciembre de 2005).

19.- Que respecto a tales delitos y conforme al derecho internacional humanitario corresponde al Estado (de Chile), luego de investigar los hechos y sancionar a los responsables, reparar a las víctimas, sean directas o indirectas, además de garantizar la no reiteración de aquellos. Tales obligaciones tienen carácter internacional y tienen como fuente un conjunto de convenciones y el derecho consuetudinario.



20.- Que la reparación ha sido conceptualizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el contexto de la Convención Americana (entre otros fallos, en el Caso Trujillo Oroza, párrafo 61) de la siguiente forma: “La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (*restitutio in integrum*), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados”

21.- Que tratándose de un delito de lesa humanidad no es dudoso que las acciones derivadas del hecho delictivo son imprescriptibles; la penal por la propia naturaleza del delito y por establecerlo así convenciones internacionales y actualmente, además, por disposición legislativa interna; y la civil por la comprensión unitaria del derecho -en especial el internacional- que debe presidir su interpretación y su aplicación, a lo que se suma la normativa constitucional sobre responsabilidad del estado y, desde hace casi una década, la reiterada jurisprudencia mayoritaria de los tribunales superiores chilenos, pudiendo señalarse que existe al menos un centenar de sentencias de la Sala Penal de la Corte Suprema en tal sentido.

22.- Que, en consecuencia, la decisión de rechazar la excepción de cosa juzgada, invocada por el Fisco de Chile, se encuentra acorde con las normas de derecho internacional que se han referido y que corresponde incorporar a nuestro derecho interno en virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo quinto



de la Carta Política, cuya razón de nacimiento fue precisamente el respeto a los derechos humanos, dentro de los cuales está -como ya se dijo- el derecho a la reparación de las víctimas.

23.- Que, lo anterior, también resulta coherente con lo dispuesto los artículos quinto inciso segundo, sexto inciso primero y segundo, diecinueve número tercero inciso primero, y treinta y ocho inciso segundo de la Constitución Política de la República, por no aplicación de los mismos y consecuentemente de las convenciones internacionales, que reglamentan la responsabilidad del Estado frente a delitos de lesa humanidad. El artículo 5° inciso segundo dispone que: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Por su parte el artículo 6° incisos primero y segundo establecen que: “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esta constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo”. A su vez, el artículo 19, en su número tres inciso primero señala: “La Constitución asegura a todas de las personas: (...) 3° la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos”. Finalmente el artículo 38 inciso segundo refiere que: “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley,



sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”.

24.- Que, del mismo modo -como se viene diciendo- el rechazo de la invocada excepción de cosa juzgada, no es más que la aplicación de las normas y recomendaciones internacionales que establecen los derechos a la protección judicial, a las garantías judiciales y a la reparación de las víctimas de crímenes de lesa humanidad; como son las convenciones temáticas de los sistemas universal e interamericano de protección de derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, las normas de ius cogens, y la Resolución Nro. 60/147 de las Naciones Unidas sobre reparaciones a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

25.- Que, sobre la materia, cabe consignar que la Corte Interamericana ha señalado que el artículo 63.1 de la Convención Americana, que dispone que la Corte debe ordenar una justa indemnización a la parte lesionada, refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados en orden a la debida reparación a las víctimas.

26.- Que, en tales condiciones, cabe concluir que el primer acápite del recurso de casación en el fondo presentado por el Fisco de Chile, debe ser rechazado.

27.- Que, en cuanto al segundo segmento de las alegaciones efectuadas por el Fisco de Chile, para que se declare improcedente la indemnización por daño moral que se ha demandado en razón de que de conformidad con la Ley N° 19.123 el actor obtuvo una bonificación compensatoria, y otros beneficios sociales,



los cuales, por los motivos que señala, serían incompatibles con toda otra indemnización, tal alegación debe ser igualmente desestimada, por cuanto la ley citada que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación concede pensión de reparación y otorga otros beneficios a los afectados, pero no establece de modo alguno tal incompatibilidad, sin que sea procedente suponer aquí que la referida ley se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de los derechos humanos ante la evidencia de que las acciones para obtener aquello se encontrarían a la fecha prescritas. Se trata en consecuencia de dos formas distintas de reparación y que las asuma el Estado -voluntariamente en aquel caso- no importa de modo alguno la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare, por los medios que autoriza la ley, su procedencia. Al efecto, el propio artículo 4° de la ley N° 19.123, refiriéndose, en parte, a la naturaleza y objetivos de la misma, expresa que “En caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere caber a personas individuales. Si en el cumplimiento de sus funciones la Corporación tuviere conocimiento de hechos que revistan caracteres de delito, deberá ponerlos, sin más trámite, en conocimiento de los Tribunales de Justicia”.

28.- Que, finalmente, en relación al último capítulo del recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco de Chile, es del caso subrayar que atendida la contradicción que se produce con las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que protegen el derecho de las víctimas y familiares a recibir la reparación correspondiente, estatuto normativo internacional que ha sido



reconocido por Chile y que, sin perjuicio de la data de su consagración y reconocimiento interno, corresponden a normas de ius cogens, derecho imperativo internacional que protege valores esenciales compartidos por la comunidad internacional, no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios.

29.- Que, sin perjuicio de lo razonado, en reiterada jurisprudencia, esta Corte ha sostenido que, tratándose de víctimas de un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado en la especie-, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que, en virtud de la Ley N° 19.123, reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. (En este mismo sentido, SCS Rol N° 20.288-14, de 13 de



abril de 2015; Rol N° 1.424, de 1 de abril de 2014; Rol N° 22.652, de 31 de marzo de 2015, ROL N° 15.402-18 entre otras).

Por consiguiente, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones, emanadas de los mismos hechos ilícitos y otorgarles un tratamiento desigual es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama.

Por otra parte, la reparación integral del daño no se discute en el ámbito internacional, y no sólo se limita a los autores de los crímenes, sino también al mismo Estado. La normativa internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, pues, sin duda, siempre ha existido, evolucionando las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho quebrantado.

30.- Que, en consecuencia, a juicio de quienes disienten no se han producido los errores de derecho denunciados en el recurso de casación en el fondo que se analiza, por lo que también debe ser desestimado.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos y del voto en contra sus autores.

Regístrese.

N° 33344-20

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., el Ministro Suplente Sr. Jorge Zepeda A., y los Abogados Integrantes Sr. Diego Munita L., y Sra. Pía Tavolari G. No firma el Ministro Suplente Sr. Zepeda y la Abogada Integrante Sra. Tavolari, no obstante



haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido su período de suplencia y por estar ausente, respectivamente.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 13/08/2021 15:29:54

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 13/08/2021 15:29:55

DIEGO ANTONIO MUNITA LUCO
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 13/08/2021 15:29:56



En Santiago, a trece de agosto de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



SENTENCIA DE REEMPLAZO

Santiago, trece de agosto de dos mil veintiuno.

En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 786 del Código de Procedimiento Civil, y lo ordenado por la decisión precedente, se dicta el fallo de reemplazo del que se ha anulado en estos antecedentes.

VISTOS:

Se reproducen los fundamentos primero a sexto de la sentencia en alzada y el considerando primero de la sentencia recurrida. Asimismo, de la decisión de casación que antecede, se dan por reiteradas las reflexiones séptima a décimo sexta.

Y SE TIENE ADEMÁS PRESENTE:

PRIMERO: Que a efectos de un adecuado análisis y resolución de esta litis, conviene consignar que no fue controvertido:

1° Que ante el 5° Juzgado Civil de Santiago, en la causa Rol N° C-9405, caratulados “Aguilar González Orlando y otros con el Fisco de Chile”, se dedujo demanda de indemnización de perjuicios por daño moral, en contra del Fisco de Chile por el demandante Garcés, junto con otros 514 actores, en su calidad de víctima de detención ilegal y torturas, cometidas por agentes del Estado, la que con fecha 13 de abril de 2010, fue rechazada, por estimar que la acción civil impetrada se encontraba prescrita.

2° Que, dicha sentencia, fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en los autos N°4240-2010, con fecha 2 de junio de 2011.

3° Que, en contra de esta última, los demandantes interpusieron recurso de casación en el fondo, el cual fue desestimado en los autos rol 6407-2011, de esta Corte Suprema, con fecha 2 de septiembre de 2011.



4° Que el demandante Juan Antonio Garcés Carreón, interpuso demanda de indemnización de perjuicios por daño moral, en contra del Fisco de Chile, la que en los autos Rol N° C-573-2019, del 1° Juzgado Civil de Valdivia, por sentencia de 28 de octubre de 2019, fue acogida.

5° Que, la referida sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, con fecha 2 de marzo de 2020, con declaración que se reduce el monto de la indemnización a \$50.000.000, más los intereses y reajustes indicados en el fallo individualizado.

SEGUNDO: Que, al confrontar los dos procesos involucrados, con el objeto de indagar sobre la concurrencia de la triple identidad en este caso entre el fallo que sirve de sustento a la excepción de cosa juzgada y aquel en que ésta se opone, cabe concluir que ésta situación se configura en la especie, pues el demandante don Juan Garcés Carreón, demandó ya previamente al Fisco de Chile, por los mismos sucesos de la demanda presentada en el año 2005, esto es, por su responsabilidad en la detención y torturas experimentadas por el actor, cometidos por agentes del Estado. En efecto, en ambas demandas se interpusieron pretensiones indemnizatorias basadas en los mismos hechos – y también fundada en las normas internacionales, constitucionales y legales que constituyen el estatuto de los derechos humanos y en aquellas que establecen los sistemas de responsabilidad del Estado, sin que sea necesaria una igualdad completa o exacta entre ambas demandas como si fuera una copia calcada de la otra (SCS Rol N° 20.346-2018 de 20 de abril de 2020).

TERCERO: Que, el instituto jurídico de la cosa juzgada atañe a los efectos jurídico-procesales del litigio ya concluido en la nueva acción que ha sido propuesta; lo que importa una limitación al derecho que, por regla general tienen las partes para postular acciones de toda clase. Por consiguiente, su objetivo es



impedir un nuevo pronunciamiento sobre materias en que ya ha recaído una decisión, reconociéndose un carácter inmutable a las decisiones jurisdiccionales, para lograr una efectiva seguridad jurídica que permitirá una completa certeza, “impidiendo la renovación indefinida de pleitos entre las partes sobre el mismo asunto” (Corte Suprema Rol N° 1289-2005 y recientemente Rol N° 20.520-18 de 14 de noviembre de 2019, Rol N° 21015-20 de 5 de agosto de 2020 y Rol N° 14784-20 de 23 de septiembre de 2020).

CUARTO: Que, la relevancia de la cosa juzgada también resulta corroborada a nivel internacional.

En efecto, la Corte Internacional de Justicia la consagra entre aquellos principios generales de derechos reconocido por las naciones civilizadas (Theofanis, Rosa. The doctrine of res judicata in International Criminal Law. International Criminal Law Review 3; 2003. P. 195). En el mismo sentido, otras cortes la consideran una “esencial y asentada regla de derecho internacional” y “un principio fundamental, universal y absoluto del derecho de las naciones” (Citado por Benjamín Salas Kantor, María Elisa Zavala Achurra, The Principle of res judicata before the International Court of Justice: in the Midst of Comradeship and Divorce between International Tribunals, Journal of International Dispute Settlement, Volume 10, Issue 2, June 2019, P. 292).

Que por otra parte, su relevancia también puede apreciarse al analizar el sistema interamericano. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puesto de relieve la importancia de la seguridad jurídica, la que se vincula íntimamente con la cosa juzgada. Sobre este tópico se ha mencionado que “el marco legal debe brindar seguridad jurídica al ciudadano” (Mosquera, S. (2010). Comentario al caso Usón Ramírez vs. Venezuela. Sentencia de la Corte Interamericana de 20 de noviembre de 2009. Revista de Derecho, 11, 525-538),



relacionando esta certeza con el efecto de cosa juzgada que producen las sentencias de los tribunales de justicia. Así ha dicho este tribunal al señalar que “una sentencia con carácter de cosa juzgada otorga certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto y, por ende, tiene como uno de sus efectos la obligatoriedad o necesidad de cumplimiento. Lo contrario supone la negación misma del derecho involucrado” (Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Párr. 82). De este modo no solo son los sistemas jurídicos internos que destacan la seguridad jurídica que entrega la cosa juzgada, sino también las cortes internacionales.

En definitiva, al decir de Savigny, “una larga experiencia y las leyes de diferentes pueblos atestiguan que la incertidumbre del derecho ha sido considerada como el mal mayor, y para prevenirlo ha habido que recurrir a una institución del derecho positivo. No se hacían ilusiones sobre el peligro opuesto, el de mantener irrevocablemente las decisiones injustas; pero este peligro es en sí mismo mucho menor (...) La institución, en extremo importante, destinada a llevar el fin propuesto, puede definirse en general por la autoridad de la cosa juzgada, es decir, una ficción de verdad que protege las sentencias definitivas contra todo ataque y toda modificación” (Cita a Savigny contenida en el trabajo de Juan Carlos Marín González, titulado “Algunos aspectos relevantes de la cosa juzgada”, publicado en la Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado, N° 37, 2017, pp. 47-73).

QUINTO: Que, en consecuencia, concurriendo los presupuestos establecidos en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, procede acoger la excepción de cosa juzgada impetrada por el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile.



Que decidir lo contrario afectaría los principios básicos que regulan el principio de la cosa juzgada, institución procesal de orden público entendida como el efecto de autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla, siendo sus atributos la inmutabilidad, impugnabilidad y coercibilidad.

SEXTO: Que, atendido lo resuelto precedentemente no se emitirá pronunciamiento respecto de las demás excepciones opuestas por la demandada.

Por estas consideraciones y, visto además lo dispuesto en los artículos 175, 177, 178, 180, 186 y 310, del Código de Procedimiento Civil, se decide que se acoge la excepción de cosa juzgada invocada por el Fisco de Chile, por lo que se revoca la sentencia apelada dictada en los autos Rol N°C-573-2019, de 28 de octubre de 2019, por el 1° Juzgado Civil de Valdivia y en su lugar se resuelve que se rechaza la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral deducida por Juan Antonio Garcés Carreón, en contra del Fisco de Chile.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Zepeda y el Abogado Integrante Sr. Munita, quienes, atendida su disidencia manifestada en el fallo de casación, estuvieron por confirmar sin modificaciones la sentencia en alzada.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos y del voto en contra sus autores.

Regístrese y devuélvase.

N° 33344-20

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., el Ministro Suplente Sr. Jorge Zepeda A., y los Abogados Integrantes Sr. Diego Munita L., y Sra. Pía Tavolari G. No firma el Ministro Suplente Sr. Zepeda y la Abogada Integrante Sra. Tavolari, no obstante



haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido su período de suplencia y por estar ausente, respectivamente.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 13/08/2021 15:29:57

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 13/08/2021 15:29:57

DIEGO ANTONIO MUNITA LUCO
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 13/08/2021 15:29:58



En Santiago, a trece de agosto de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

